

ANEXO A

ABORDAR LOS DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DERECHO A LA TIERRA EN AMÉRICA LATINA

Las desigualdades persistentes y los patrones climáticos cambiantes están exacerbando la inseguridad alimentaria en América Latina. En 2023, 247,8 millones de personas (37,5% de la población) se vieron afectadas por una inseguridad alimentaria de moderada a grave¹. Las poblaciones rurales se ven afectadas de manera desproporcionada, lo que subraya la importancia de promover la soberanía alimentaria en toda la región. A la inseguridad alimentaria se suma la distribución de la tierra en América Latina y el Caribe, que es la más desigual de cualquier región del mundo. Los informes indican que más de la mitad de las tierras agrícolas están en manos de solo el 1% de las grandes propiedades. En cambio, el 80% de las explotaciones más pequeñas representan menos del 13% de la tierra productiva².

1.1 VOZ REGIONAL

El grupo de expertos proporcionó un panorama regional de los problemas más apremiantes para la seguridad alimentaria en América Latina: los impactos adversos de las grandes empresas agroindustriales y la erosión de los derechos sobre la tierra. Estos desafíos interconectados

amenazan la seguridad alimentaria, la soberanía y la sostenibilidad en la región, particularmente para las comunidades indígenas y rurales.

La expansión de la agroindustria en América Latina impacta los ecosistemas frágiles y socava la capacidad de las comunidades rurales para establecer sistemas alimentarios resilientes. Los dos ejemplos siguientes ilustran las preocupaciones del grupo regional. En Bolivia, la práctica generalizada de reemplazar los bosques primarios con cultivos de palma africana (principalmente para biocombustibles) y soja (principalmente para alimentación animal) está acelerando la deforestación y alterando los ecosistemas. Al mismo tiempo, las operaciones mineras de oro en la cuenca del Amazonas están liberando mercurio al medio ambiente, contaminando las fuentes de agua y planteando un riesgo para la salud de las comunidades circundantes. Estas prácticas socavan la seguridad alimentaria al contaminar las fuentes de agua y provocar sequías. En México, el clima extremo y la reducción de las precipitaciones están alterando los ciclos agrícolas tradicionales de las comunidades. Por ejemplo, los sistemas de conocimiento relacionados con los ciclos climáticos y la plantación, que han sido desarrollados durante miles de años por los pueblos de la región de Ayuujk, corren el riesgo de perderse debido a las alteraciones climáticas³. Como lo muestran estos

1 OCHA. 2023. Actualización semanal de la situación de América Latina y el Caribe. Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

2 Cerrato, A., Ramírez, M. y Hackbart, R. 2022. Gobernanza de la tierra en América Latina y el Caribe – Innovación e inclusión para la recuperación económica y la resiliencia. Organización para la Agricultura y la Alimentación. Santiago de Chile.

3 La milpa de las lenguas y el llamado cambio climático. Medium, 23 of March 2024. https://medium.com/@milpa_climatica/diazniipyjoojt-ku-yë-et-näxwii-nyët-tyëk-äjts-atëtsnë-729a2d02b9e5.

ejemplos, las prácticas extractivas, la deforestación y el cambio climático están cambiando los patrones climáticos y perturbando ecosistemas frágiles, lo que a su vez desestabiliza los sistemas alimentarios y socava la seguridad alimentaria en la región.

La lucha por los derechos a la tierra y la ausencia de marcos legales claros obstaculizan la búsqueda de la soberanía alimentaria para las comunidades indígenas y rurales. El grupo regional encontró dos ejemplos que ilustran las luchas que enfrentan las comunidades en América Latina para acceder a la tierra y establecer sistemas alimentarios resilientes. En Argentina, las grandes empresas agrícolas monopolizan la tierra y a menudo desplazan a los pueblos indígenas y a las comunidades rurales de sus tierras, violando así su autonomía territorial garantizada en virtud del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989. Además, la cadena de valor agroalimentaria en Argentina está dominada por solo cuatro corporaciones, que representan casi el 50% de la producción de harina de trigo y más del 55% de las exportaciones⁴. Argentina controla el 73% del mercado latinoamericano en este sector. La disparidad en el acceso a la tierra afecta desproporcionadamente a los pequeños agricultores y a las comunidades rurales, socavando su soberanía alimentaria y territorial. En México, los pueblos rurales e indígenas también luchan por cultivar la tierra de forma autónoma debido al despojo, la explotación y los peligros que representan el narcotráfico y el crimen organizado.

1.2 MENSAJE CLAVE

En América Latina, los impactos adversos de la agroindustria y las desigualdades territoriales amenazan la seguridad alimentaria en la región. Estos impactos se manifiestan mediante prácticas económicas que impulsan la deforestación, alteran los ecosistemas y contaminan las fuentes de agua, lo que afecta los medios de vida locales. Esto se ve agravado por la distribución desigual de la tierra y la erosión de los derechos sobre la tierra,

que impiden a las comunidades construir sistemas alimentarios resilientes para sustentarse y, a menudo, las exponen a la violencia. Además, los ciclos agrícolas se ven cada vez más alterados por el cambio climático, lo que empeora la inseguridad alimentaria en la región. En medio de estos desafíos interrelacionados, es importante implementar políticas ambientalmente justas que promuevan la distribución justa de la tierra, la soberanía alimentaria y la conservación del medio ambiente.

1.3 PÚBLICO OBJETIVO

El grupo de trabajo identificó actores clave para abordar estos desafíos: Estados, autoridades locales, productores locales, accionistas de los sectores agroindustriales y el bloque regional Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

1.4 RECOMENDACIONES

Para lograr la visión de políticas ambientalmente justas que promuevan la distribución justa de la tierra, la soberanía alimentaria y la conservación del medio ambiente, se recomiendan las siguientes acciones para los actores regionales y nacionales. Es importante señalar que las recomendaciones del grupo brindan una dirección general y no están destinadas a adaptarse específicamente a cada audiencia identificada.

1. Reconocer que las soluciones a la inseguridad alimentaria, como los programas de adaptación y las políticas públicas, necesitan criterios mensurables, verificables y reportables en su diseño e implementación, para evaluar su impacto. Las soluciones propuestas deben responder a cuestiones de seguridad alimentaria nacionales, subnacionales y locales y deben materializarse adecuadamente en recomendaciones específicas.
2. Asegurar la integridad e independencia institucional en la aplicación y control de la normativa minera, asegurando que las actividades extractivas cumplan con estándares legales y éticos, protegiendo los derechos de la naturaleza y los humanos.

⁴ Orchani, F. y Badaracco, F. 2019. Sano, rico y barato. Seis puntos para construir una alternativa al modelo alimentario excluyente. Centro de Estudios Legales y Sociales. Buenos Aires.

3. Llamar a los Estados a implementar políticas que formalicen la propiedad legal, para brindar a las personas seguridad en la tenencia de la tierra que habitan y en la que han trabajado. Los Estados también deben implementar políticas para la regularización de títulos de propiedad, asegurando que las familias que han habitado y trabajado en la tierra durante décadas obtengan títulos de propiedad. Además, las políticas deberían garantizar a los pequeños productores un acceso seguro a la tierra.
4. Desarrollar políticas para fortalecer la capacidad productiva, distribución y comercialización de alimentos de los pequeños y medianos productores para el mercado interno. Los Estados deberán reconocer la importancia de los pequeños agricultores aumentando su participación en el mercado. Además, se deben utilizar mecanismos de mercado para controlar los precios, descentralizar el sector agrícola y garantizar que las prácticas agrícolas industrializadas respeten la tierra y la vida.
5. Utilizar el suelo según su vocación y fortalecer las normas de uso del mismo. Por ejemplo, convertir tierras utilizadas para la producción intensiva de soja para exportación a producción orgánica. Además, las regulaciones incendiarias deben modificarse o anularse en países como Bolivia. De manera similar, deberían anularse también las regulaciones que permiten la especulación de tierras y la venta y privatización de tierras comunitarias.
6. Investigar prácticas agrícolas ancestrales, ecológicas y agroecológicas en beneficio de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades rurales. Esta difunde conocimientos relacionados con la tierra, la producción de alimentos y los hábitos alimentarios saludables. Además, generar comercio sostenible entre comunidades rurales fortalecerá la seguridad y los sistemas alimentarios sostenibles.
7. Garantizar que las políticas climáticas se alineen con las prácticas ancestrales de protección de la naturaleza y los derechos colectivos a la tierra de las mujeres afrodescendientes, quilombolas e indígenas. Todas las partes involucradas deben reconocer el papel de la raza y el género, y coordinarse con grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil. Abordar la injusticia climática histórica y erradicar el racismo sistémico son esenciales para las reparaciones en el contexto de la crisis ecológica global.